



RESOLUCIÓN No. 168.

MINISTERIO DE ECONOMÍA: San Salvador, a las nueve horas y treinta minutos del día veintitrés de febrero de dos mil diecisiete.

Vistas las diligencias procedente de la Dirección de Hidrocarburos y Minas en virtud del Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **CLAUDIA CAROLINA CRIOLLO SALAZAR**, en su calidad de Apoderada General Judicial con Cláusula Especial del señor **ISABEL DE PAZ HENRÍQUEZ**, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] y demás generales expresadas en este proceso, en contra de la Resolución número **CUATROCIENTOS DOCE**, emitida a las quince horas y treinta minutos del día dieciséis de noviembre de dos mil quince por la Dirección de Hidrocarburos y Minas de este Ministerio, que condena a su representada al pago de una multa de **VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$24,660.00)**, por infracción al artículo 16 de la Ley de Minería en un inmueble de su propiedad ubicado en kilómetro treinta y seis y medio de la carretera Litoral, frente al Hotel Arcos, Lotificación Conchalío, municipio y departamento de La Libertad.

LEIDOS LOS AUTOS Y

CONSIDERANDO:

I. Que de conformidad a lo establecido en la Resolución impugnada, se le impuso al señor **ISABEL DE PAZ HENRÍQUEZ** una multa de **VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$24,660.00)**, por haber comprobado la Dirección de Hidrocarburos y Minas, el cometimiento de la infracción grave regulada en el artículo 69 de la Ley de Minería en relación a su artículo 16, consistente en "Realizar las actividades mineras sin la

correspondiente autorización", la cual le fue notificada el día veinte de noviembre de dos mil quince.

II. Que no estando conforme señor **ISABEL DE PAZ HENRÍQUEZ** con la Resolución antes mencionada, interpuso en tiempo y forma el día veinticinco de noviembre del dos mil quince por medio de la Licenciada **CRIOLLO SALAZAR** en su calidad ya dicha, Recurso de Apelación para ante el señor Ministro de Economía.

III. Que por auto pronunciado a las once horas y veinte minutos del día siete de enero del dos mil dieciséis, se dieron por recibidas las diligencias en virtud de haberse interpuesto en tiempo y forma el Recurso de Apelación, y de conformidad con el Art. 45 inciso 2º de la Ley de Minería, se ordenó oír a la recurrente por el término de tres días hábiles, auto el cual le fue notificado el día dieciocho de febrero del referido año, evacuando esta audiencia la apelante mediante escrito de fecha veintidós de dicho mes, presentado en la Gerencia de Asuntos Jurídicos de este Ministerio al día siguiente, expresando los siguientes agravios: a) Que el proceso administrativo sancionador objeto de la presente alzada dio inicio con una inspección realizada en un inmueble ubicado en kilómetro treinta y seis y medio de la Carretera Litoral, frente al Hotel Arcos, Lotificación Conchalío, municipio y departamento de La Libertad, que en dicha Acta consta una incongruencia y que al momento de presentar la prueba documental de descargo ante la Dirección de Hidrocarburos y Minas, se agregó una constancia certificada ante Notario expedida por el señor **JARVIN RUBÉN GONZÁLEZ** en su calidad de Representante Legal de la Sociedad denominada **ASTRALL, S.A. DE C.V.**, y en la cual se dice que su representado le regaló a dicha sociedad tierra de un inmueble que se encuentra cerca del proyecto de construcción propiedad de la Sociedad antes mencionada, quedando en entredicho lo plasmado por los delegados en el Acta de Inspección realizada el día uno de octubre de dos mil quince, y según la cual los delegados de la citada Dirección se hicieron presentes en el inmueble ya relacionado siendo atendidos por el señor Pedro Alfonso Martínez, quien manifiesto que el material lo compra al propietario de dicho terreno. Esas aseveraciones son totalmente incongruentes, ya que como se expone en su escrito de agravios y constancia que



Ministerio de Economía

presenta, su mandante regaló tierra a la Sociedad **ASTRALL, S.A. DE C.V.**, además su representado desconoce que existía algún tipo de yacimiento de materiales en el inmueble, y que él únicamente se limitaba a regalar la tierra extraída, así mismo dice que si encaja ese concepto con el establecido en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Minería, y se estarían refiriendo al suelo, siendo éste la capa exterior que compone la corteza terrestre. b) Señala también, que su representado no conoce al señor Pedro Alfonso Martínez, y en el Acta no se hace alusión a la calidad de dicho señor, por lo que no se puede tener como cierto lo expresado por el mencionado señor, debido a que existe prueba documental que demuestra lo contrario. c) Cita el Romano III de la Resolución recurrida, señalando que la precitada Dirección realiza una valoración sobre lo expresado por su mandante, diciendo que lo expuesto por él no es una razón válida para desvirtuar el contenido del Acta que dio origen al informativo, y que manifestaron que su mandante aceptó el cometimiento de la infracción, sin embargo dice que esa aseveración está descontextualizada porque él únicamente dijo que la tierra extraída era utilizada para la referida Sociedad. d) Cita los artículos 313 y 318 del Código Procesal Civil y Mercantil con el fin de establecer que la copia certificada por Notario de la nota emitida por el Representante Legal de la Sociedad **ASTRALL, S.A. DE C.V.**, hace plena prueba, quedando establecido que su representado únicamente le otorgó a dicha Sociedad permiso para usar la tierra del lugar, y no para la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables existentes en el suelo y subsuelo de la República; además se refiere al concepto de tierra contenido en el Diccionario Jurídico de Manuel Osorio, el cual se armoniza con lo señalado en el artículo 2 del Reglamento de la Ley, se estaría refiriendo al suelo, por lo que la sociedad a la que su mandante autorizó extraer el suelo, se extralimitó al extraer otro tipo de materiales, siendo esa sociedad la que cometió la infracción que se le atribuye al señor De Paz Henríquez. d) Concluye citando el artículo 8 de la Constitución,

el cual hace referencia al Principio de Legalidad a fin de establecer que su mandante no realizó ninguna actividad prohibida por la Ley de Minería.

IV. Que en relación a lo alegado por la Apoderada del Recurrente, se señala que:

a) La Ley de Minería faculta al Ministerio de Economía para que de manera oficiosa o por denuncia, supervise si las explotaciones que se están realizando cuentan con la debida concesión, siendo el procedimiento a seguir efectuar la inspección y hacerla constar en Acta la que sirve de base para dar inicio al informativo, en cuyo sentido los conceptos que se vierten en las actas de inspección gozan de veracidad para las partes y para terceros, tal como lo ha señalado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 22-2008 "...Los conceptos que se vierten en las actas, gozarán de una presunción de veracidad para las partes y terceros mientras no se pruebe lo contrario. Esto es así, en virtud de la seguridad jurídica que debe concurrir en cada proveído jurisdiccional; debe dársele la fe que se le otorga, pues de lo contrario, quedarían de manera arbitraria e indistinta para las partes -cuando así les parezca- la posibilidad de impugnar y tornar incierta cada actividad que en este sentido realice un tribunal, lo que ocasionaría indirectamente iniquidad e inseguridad latente y alterna en la búsqueda de la justicia..."; en dicho sentido, los conceptos que se vierten en un Acta en virtud del principio de presunción de veracidad en relación al principio de seguridad jurídica que debe concurrir en cada proveído jurisdiccional, debe dársele la fe que se le otorga pues de lo contrario quedaría de manera arbitraria e indistinta para las partes -cuando así les parezca- la posibilidad de impugnar y tornar incierta cada actividad que en este sentido realice un tribunal, lo que ocasionaría indirectamente iniquidad e inseguridad latente y alterna en la búsqueda de la justicia. Al respecto, en el Acta consta que los delegados de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, inspeccionaron el inmueble propiedad del Recurrente, por lo que es importante determinar el valor probatorio de las actas de inspección, para lo cual se cita la Resolución con Referencia 173-2006 emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, la que dice "que el acta de la diligencia de inspección tiene el carácter de ser un documento público administrativo, pues es emitido por una autoridad o funcionario delegado de la Dirección de Hidrocarburos y



Minas en el ejercicio de las funciones que le han sido conferidas... ese tipo de documentos constituyen plena prueba y dan fe de los hechos suscitados ante el referido delegado, en los términos que acredita en el acta ... ", habiendo sido éste uno de los elementos que motiva la Resolución objeto de este Recurso de Apelación.

b) En cuanto a la incongruencia alegada, es preciso hacer referencia a que el artículo 1 de la Ley de Minería, establece que ese cuerpo normativo regula los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables existentes en el suelo y subsuelo del territorio de la República; asimismo, la Minería puede ser de dos tipos metálicas y canteras -no metálica-, para el caso del presente Recurso de Apelación, nos referimos a esta última la cual es definida en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Minería, como "los yacimientos de piedras de construcción y de adorno, las puzolanas, turbas, mármoles, arenas, arcillas, cales, yesos y demás sustancias minerales generalmente utilizadas para la construcción, industrialización de materiales de construcción, la ornamentación y la industria cerámica", por lo que los delegados, al momento de efectuar la inspección, observan que la extracción estaba relacionada a minerales no metálicos, de manera específica puzolana y pómez. Es pertinente acotar, que las personas que desean explotar una cantera deben de seguir el trámite que establece la Ley de Minería en sus artículos 36 y siguientes, y al obtener la concesión por parte del Estado, deberá de inscribir ésta en el Registro Minero de conformidad al artículo 49 de la precitada Ley, por lo cual es una explotación ilegal. c) Que es preciso aclarar que la Apoderada ha confundido al evacuar sus alegatos, el concepto de tierra y de suelo, y trata de homologar ambos conceptos para legitimar que su representado haya dispuesto del suelo, explotándolo por sí o por medio de terceros, con o sin ánimo de lucro, y de esta forma establecer que el actuar del recurrente no se adecuaba a la conducta punible; sin embargo, la Ley de Minería regula la explotación tanto del suelo como del subsuelo, la cual no necesariamente debe de tener ánimo de lucro, en cuyo sentido citó el artículo 3 de ese mismo cuerpo normativo que expresa "Para la

exploración y explotación de minas y canteras, el Estado podrá otorgar Licencias o Concesiones, siempre que se cumpla con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento", siendo el artículo 2 del Reglamento de la Ley de Minería, que define el término explotación, como: "las obras y trabajos de superficie o subterráneos destinados a la preparación y desarrollo del área que comprende el depósito mineral, así como los encaminados a desprender y extraer los productos minerales existentes en el mismo", no estableciéndose en el precitado concepto que la extracción deba de hacerse con la intención de comercializarlo, sino que al ser un bien del Estado, todas aquellas actividades relacionadas con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos no renovables existentes en el suelo y el subsuelo de El Salvador, son regulados en los términos establecidos por la Ley de Minería. Por lo que al verificar el Acta de inspección y los escritos presentados por el Recurrente y su Apoderada, se establece que él se encontraba explotando el área en referencia. c) En cuanto al valor probatorio de la nota emitida por la Sociedad ASTRALL, S.A. DE C.V., es pertinente mencionar que es una copia certificada notarialmente, y que no consta en ésta que efectivamente la firma ahí consignada sea del representante legal de esa sociedad, asimismo al analizar su contenido se puede establecer que ellos extraían el material con autorización del señor De Paz Henríquez, no desvaneciendo con ello la infracción cometida por el Recurrente.

V. Que por las razones antes expuestas, los alegatos de la Apoderada del Recurrente no logran desvirtuar la certeza de la explotación realizada sin la debida autorización que requiere el Art. 16 de la Ley de Minería, disposición legal que claramente determina que se prohíbe realizar actividades mineras sin la correspondiente autorización, y quien contraviniese esta norma incurrirá en las sanciones establecidas. De manera que, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, de acuerdo al Artículo 19 del Código Civil. Ahora bien, realizar actividades mineras sin la correspondiente autorización como en este caso, la Ley de Minería la clasifica como grave en sus artículos 69 Inciso 3° letra a) y 69-A inciso segundo.



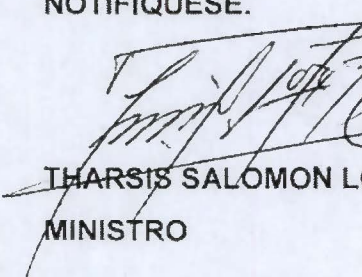

POR TANTO:

Con base en las razones expuestas, disposiciones legales citadas y a los artículos 86 inciso 3º, y 246 inciso 2º de la Constitución de la República; 1, 2, 4, 5 letra c), 6 letra g), 16, 45, 69 Inciso 3º, letra a) y 69-A de la Ley de Minería, este Ministerio,

RESUELVE:

- 1) **DECLARASE NO HA LUGAR** el Recurso de Apelación presentado por la Licenciada **CLAUDIA CAROLINA CRIOLLO SALAZAR**, en su calidad de Apoderada General Judicial con Cláusula Especial del señor **ISABEL DE PAZ HENRÍQUEZ**, en contra de la Resolución número cuatrocientos doce pronunciada por la Dirección de Hidrocarburos y Minas a las quince horas y treinta minutos del día el dieciséis de noviembre de dos mil quince.
- 2) **CONFÍRMASE** en todas sus partes la Resolución número cuatrocientos doce pronunciada por la Dirección de Hidrocarburos y Minas de este Ministerio, en esta ciudad, a las quince horas con treinta minutos del día dieciséis de noviembre de dos mil quince.
- 3) **DEVUÉLVANSE** estos autos a la Oficina de su origen para los efectos consiguientes.

NOTIFÍQUESE.



THARSIS SALOMON LOPEZ GUZMAN
MINISTRO

EAA/NCR

